

Con el **apercibimiento** que de no cumplir con lo ordenado por esta potestad judicial, sin causa legal para ello, de conformidad con el numeral 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una **multa** por el equivalente a cien unidades de medida y actualización a que alude la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo monto vigente es de \$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve.

Sin que sea necesario requerir su informe previo a las restantes autoridades responsables, en virtud que la existencia de los actos de naturaleza legislativa no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos públicos y notorios, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Aunado al hecho de que se solicita la suspensión de las consecuencias de la norma tildada de inconstitucional, de ahí que no es necesario que obren los informes previos de las autoridades que participaron en el proceso legislativo correspondiente.

En el entendido que si las autoridades responsables señaladas en la demanda resultan inexistentes o imprecisas, este Juzgado Federal declarará su inexistencia y suspenderá toda comunicación con ellas, sin necesidad de previa vista a las partes.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las **doce**



horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve para que tenga verificativo la audiencia incidental.

En otro aspecto, la parte incidentista solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se le aplique la limitante que el artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve realiza a los artículos 23, primer párrafo del Código de la Federación y 6, primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en lo concerniente a la materia de compensación de cantidades a favor establecidas en estos últimos ordenamientos y, por ende, que continúe cumpliendo con sus obligaciones fiscales conforme a las referidas disposiciones.

Ahora, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión de dichas consecuencias generadas por la aplicación de un ordenamiento legal, debe verificarse si tal petición reúne las exigencias contenidas en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo.

Tales dispositivos legales contienen los requisitos para decretar la suspensión fuera de los casos que contempla el numeral 128 de la legislación de la materia y describe las hipótesis que contravienen cuestiones de orden público, por lo que una vez que se cumplan dichos requisitos y no encuadre en alguno de los supuestos indicados deberá otorgarse dicha medida cautelar.

Así, la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo exige, para la obtención de la suspensión de los actos reclamados, que quien la solicite se trate de parte agraviada, entendida como aquella que tiene un interés legítimamente tutelado en la obtención de la medida precautoria, es decir, acredita el interés suspensorial que le asiste en la obtención de dicho beneficio.

En el caso concreto se cumple con lo previsto por esa fracción, en tanto que, quienes solicitan la medida cautelar se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y por tanto están obligadas a cumplir con las disposiciones fiscales, lo que puede apreciarse de las documentales que las morales quejas anexaron a su demanda, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 130, 197, 202 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los diversos 17-D del Código Fiscal de la Federación, ya que cuentan con sello digital que acredita su procedencia y producen los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Por su parte, la fracción II de la disposición legal en cita demanda para la concesión de la suspensión de los actos reclamados que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

El orden público y el interés social son conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser precisado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración.



En todo caso, para darles significado el Juzgado de Distrito debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución.

Cabe recordar que las morales quejas impugnan la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, en específico el artículo 25, fracción VI, que es del contenido siguiente:

“Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente: (...)

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades a favor establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente:

a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas

reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado.

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico.

b) *Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.”*

En relación con el tema de la compensación abordado en el precepto transcrito, el diverso 23, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, estipula:

“Artículo 23. *Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique. (...)”*

El segundo precepto transcrito prevé que el contribuyente obligado a pagar mediante declaración podrá optar por compensar las cantidades que tengan a su favor



contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, **siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación**, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios.

Por su parte, la fracción VI, inciso a), del primer de los numerales reproducidos, dispone la posibilidad de compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, **siempre que ambas deriven de un mismo impuesto**, incluyendo sus accesorios en los términos que las legislaciones lo establezcan.

Lo anterior revela que el contribuyente obligado a pagar mediante declaración tendrá el derecho a compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Derecho que se limita en el contenido del dispositivo legal impugnado, al establecer únicamente la posibilidad de compensar las cantidades que los contribuyentes tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar, compensación que será por adeudo propio y respecto a un mismo impuesto, en los términos que la propia ley determina.

Ahora, de la exposición de motivos que dio origen a la norma combatida¹, en lo relacionado a su numeral 25, fracción VI, el legislador la justificó por ser una medida tendente a contrarrestar prácticas que impliquen abuso a la figura de la compensación llevada a cabo por algunos contribuyentes para evadir sus obligaciones fiscales, también, para que la administración tributaria pueda tener un control eficaz sobre los acreditamientos del impuesto sobre el valor agregado, así como para un mejor registro de la recaudación de cada uno de los impuestos.

No obstante, si bien el uso indebido de la figura de la compensación, en ciertos casos, ha provocado la evasión en el pago de impuestos, no hay motivo para estimar que en el caso de una devolución del saldo a favor, ello no ocurrirá; de ahí que, para considerar que existe una afectación al orden público y al interés social, es necesario que con la medida cautelar se limiten las facultades de comprobación que la autoridad fiscalizadora tiene expeditas, lo que en el caso no acontece.

Tampoco debe soslayarse que la medida legislativa analizada no constituye el único medio empleado por la autoridad recaudadora para detectar si los contribuyentes actúan en agravio del fisco, pues está en aptitud de ejercer sus atribuciones para vigilar el cumplimiento de las normas hacendarias, sin que deban existir deferencias en tratándose de devolución o compensación, ya que el saldo que en su caso exista a favor del contribuyente respecto de uno o más impuestos federales debe estar plenamente

¹ La cual puede ser consultada en la página https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/ingresos/LIF_2019.pdf



acreditado y sujeto a igual escrutinio tanto en uno como en otro supuesto.

Además, debe tenerse en cuenta que no se ha modificado el artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para prohibir de forma permanente la compensación universal de tributos, sino que la restricción impuesta en el artículo 25, fracción VI, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diecinueve, es una medida temporal adoptada por el gobierno para combatir los abusos de algunos contribuyentes durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, de ahí que permitirle a la parte quejosa efectuar la compensación con terceros, no provoca, por sí sólo, una evasión fiscal.

Por esa razón, es evidente que la suspensión solicitada no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, ya que las restricciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en dejar de compensar tributos de distinta naturaleza, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de combatir las prácticas evasivas que algunos contribuyentes realizan, con la concesión de esta medida cautelar no se impide que las empresas quejasas cumplan con sus obligaciones fiscales, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, por lo que la colectividad no recibe ningún daño si se les permite a las contribuyentes continuar compensando tributos conforme al numeral 23 del Código Fiscal de la Federación.

En cambio, la restricción que impone la norma combatida a los contribuyentes para compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, representa una limitación al flujo del capital de las empresas quejasas de

difícil reparación, con el riesgo, incluso, de no poder sufragar los adeudos de determinados impuestos a pesar de contar con un saldo a favor respecto de otro.

Con base en lo expuesto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se **concede la suspensión provisional** para el efecto de que no se aplique a las contribuyentes impetrantes la porción normativa impugnada, hasta en tanto las responsables sean legalmente notificadas de la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno.

En el entendido que con ello no se exenta a la parte quejosa de cumplir con sus obligaciones fiscales, aunado a que la suspensión tampoco conlleva restricción alguna para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación y fiscalización.

Sirve de apoyo, por los razonamientos jurídicos que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 2/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación², de contenido:

“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de

² Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1760, registro 2008430.



diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria.”

Finalmente, de conformidad con el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a costa de la parte impetrante copia certificada de este proveído y sin audiencia previa de las demás partes, autorizando para recibirlas a las personas que precisa en su escrito de demanda, previa toma de razón y entrega que se deje en autos; por lo que hace a la copia de la suspensión definitiva, dígaselo que una vez que se dicte dicha resolución deberá solicitarla nuevamente.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el licenciado **Fernando Issac Ibarra Gómez**, Juez Sexto de Distrito en La Laguna, quien actúa ante el licenciado **Christian Ballesteros de Paz** Secretario que autoriza y da fe.

En esta fecha se giraron los oficios número ****, ****, **** y ****.